

Contribución conjunta al Comentario General del Comité DESC sobre DESC en situaciones de conflicto armado

Introducción

La presente contribución, elaborada por miembros¹ de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC)², busca aportar claridad interpretativa sobre la aplicación del PIDESC en situaciones de conflicto armado. El alcance de esta contribución incluye: 1) los efectos de los conflictos armados sobre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); 2) la complicidad corporativa; 3) los efectos de los conflictos armados sobre los DESC en los países del Sur Global; 4) los efectos del rearme global sobre los DESC; y 5) los efectos de posguerra y la construcción de paz con un enfoque centrado en los DESC.

El derecho internacional distingue entre conflictos armados internacionales y no internacionales³. Sin embargo, la mayoría de las veces, ya sea que se presenten como invasiones externas u hostilidades internas, los conflictos están arraigados en estructuras y legados coloniales, incluidos patrones de despojo, jerarquías racializadas y patriarcales, fragmentación del tejido social y control desigual sobre la tierra y los recursos, con el objetivo de expandir el poder y el capital de las élites económicas. Invitamos al Comité a abordar las raíces coloniales, patriarcales y capitalistas estructurales que sustentan estas formas de violencia armada, mediante un análisis interseccional y feminista, a fin de impulsar una transformación profunda de las estructuras económicas y financieras que permiten la producción y venta de armas y tecnologías esenciales para los conflictos

¹ **Contribuciones:** ALTSEAN-BURMA; Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD); Franciscans International (FI); e IBON International; miembros de los Grupos de Trabajo sobre Rendición de Cuentas Corporativa, Medio Ambiente y DESC, y Litigio Estratégico. La presentación fue facilitada por la Coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas Corporativa de ESCR-Net, Mona Sabella; la Coordinadora del Programa de Medio Ambiente y DESC, Patricia Miranda Wattimena; y el Coordinador del Programa de Litigio Estratégico, Felipe Mesel. Para más información sobre la presentación, por favor contactar a msabella@escr-net.org; pwattimena@escr-net.org; y fmesel@escr-net.org

² La Red DESC es una red integrada por 360 miembros, incluyendo movimientos sociales y feministas, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales y personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos en 80 países. Desde hace más de 20 años, la Red continúa trabajando por la justicia social a través de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la autodeterminación y los DESC.

³La Primera Convención de Ginebra distingue entre dos tipos de conflicto armado en sus artículos 2 y 3: los conflictos armados internacionales, incluidas las situaciones de invasión u ocupación entre Estados, y los conflictos armados no internacionales, frecuentemente caracterizados como “guerras civiles”, que ocurren dentro del territorio de un Estado entre fuerzas gubernamentales y actores no estatales o entre dichos grupos.

armados y, con ello, el lucro derivado de una economía de guerra cuidadosamente diseñada. El argumento central que buscamos desarrollar es que la guerra y la economía de guerra, impulsadas por corporaciones y Estados, junto con el creciente gasto estatal en infraestructura militar y armamento, restringen los recursos necesarios para la plena realización de los DESC, al tiempo que crean progresivamente las condiciones materiales que erosionan su protección y promoción⁴.

1. Efectos de los conflictos armados sobre los DESC

En situaciones de conflicto armado, todas las violaciones pueden analizarse bajo el prisma del derecho a la vida, dado que la privación del derecho a la vida se extiende a todo el conjunto de los DESC. En sus Observaciones en *Toussaint v. Canadá*⁵, el Comité de Derechos Humanos entendió que el derecho a la vida está interconectado y es interdependiente con el pleno espectro de los DESC. De este modo, la plena realización del derecho a la vida implica que este es inseparable de las condiciones materiales necesarias para garantizar el acceso a una vida digna, incluidos los derechos a la salud, la educación, la alimentación, el agua, una vivienda adecuada, un ambiente limpio, saludable y sostenible, y el trabajo⁶. En consecuencia, las obligaciones estatales no se limitan a abstenerse de privar arbitrariamente de la vida a las personas, sino que también incluyen obligaciones positivas de protección. Negar, por ejemplo, el acceso a servicios de salud cuando exista un riesgo previsible de muerte o daño irreversible constituye una violación del derecho a la vida⁷.

El Comité debería reafirmar que la obligación de respetar, proteger y garantizar los DESC sigue formando parte de las obligaciones inmediatas de los Estados bajo el Pacto en

⁴El genocidio en Gaza perpetrado por el Estado de Israel, la invasión estadounidense a Iran, la grave crisis humanitaria y de derechos humanos en Myanmar causada por la junta militar, los casos de West Papua, Timor-Leste y Sri Lanka, el conflicto de Manipur y la minería de bauxita en India, así como las bases militares estadounidenses en las Northern Mariana Islands, han informado en gran medida las lecciones y recomendaciones que buscamos transmitir al Comité en esta presentación.

⁵ Ver las Observaciones del Comité de Derechos Humanos en *Toussaint v. Canada*: <https://juris.ohchr.org/casedetails/2541/en-US>

⁶ En consonancia con la Observación General N.º 36 del Comité de Derechos Humanos, que establece que el derecho a la vida incluye el derecho a disfrutar de una vida con dignidad: <https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/general-comment-no-36-article-6-right-life>

⁷A través de este enfoque, proponemos que el Comité aborde esta cuestión no solo desde la perspectiva de la asistencia humanitaria, sino en toda su integralidad, reconociendo que el problema no radica únicamente en la insuficiencia de la ayuda humanitaria, sino en la guerra misma, así como en sus causas y consecuencias. La realización de los DESC se ve interrumpida por la guerra, lo que impacta en la disponibilidad de recursos suficientes para garantizarlos, y se agrava por la falta de una asistencia humanitaria adecuada.

situaciones de conflicto armado⁸. Tal como afirmó recientemente la Corte Internacional de Justicia⁹, el Pacto continúa aplicándose en territorios ocupados, y las potencias ocupantes siguen obligadas a garantizar el goce de los DESC sin discriminación¹⁰.

El Comité debería aclarar que los derechos a la salud y a la alimentación generan obligaciones concretas durante los conflictos armados, incluida la provisión de medicamentos esenciales, el acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud, y la disponibilidad de alimentos adecuados en condiciones no discriminatorias, particularmente para poblaciones vulnerables y marginadas¹¹. El Comentario General debería prohibir explícitamente los ataques contra infraestructura indispensable para el bienestar humano, incluidos hospitales, clínicas, sistemas de agua, viviendas, instituciones educativas y sitios religiosos y culturales. En este sentido, el Comité debería desarrollar además el concepto de “domicidio” y sus consecuencias jurídicas. Los ataques deliberados contra instalaciones sanitarias o educativas y la persecución de personal médico, estudiantes y docentes deberían reconocerse expresamente como violaciones graves del Pacto, en particular de los artículos 12 y 13, así como crímenes de guerra bajo el derecho internacional. Del mismo modo, el Comité debería reconocer y apoyar los sistemas educativos comunitarios y dirigidos por las comunidades como

⁸ Ver:

<https://geneva-academy.ch/wp-content/uploads/2025/12/Economic-Social-and-Cultural-Rights-and-Armed-Conflict.pdf>

⁹ Véase la Opinión Consultiva sobre las Consecuencias Jurídicas derivadas de las Políticas y Prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental:

<https://www.ici-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-iud-01-00-en.pdf>

¹⁰ En consecuencia, los Estados que atraviesan conflictos armados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los DESC por parte de las personas, particularmente de las mujeres y las personas LGBTIQ+, y, de hecho, proteger activamente el goce de estos derechos frente a ataques de terceros. Las obligaciones derivadas del Pacto no pueden posponerse ni dejarse de lado hasta tiempos de paz, y constituyen una prioridad incluso cuando las situaciones de conflicto armado restringen los recursos disponibles. Asimismo, debe llamarse a la investigación y el enjuiciamiento oportunos de tales crímenes como medida de disuasión frente a su repetición. En Myanmar, por ejemplo, con el agravamiento del deterioro de los DESC desde el golpe de Estado de 2021, las mujeres enfrentan pérdida de empleo, desplazamiento, inseguridad alimentaria, violencia sexual y de género, y el colapso del sistema de salud, mientras son las principales cuidadoras en entornos precarios y violentos. La junta también ha promovido el uso de discursos de odio para limitar los DESC de las personas LGBTIQ+, quienes enfrentan violencia tanto legal como extralegal. Desde el golpe de 2021 y hasta junio de 2024, la junta ha asesinado al menos a 12 personas LGBTIQ+ que participaban en protestas contra el golpe o que promovían el movimiento de desobediencia civil. Decenas más han sido detenidas y sometidas a tortura, castigos y otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

¹¹ Estas obligaciones también orientan las responsabilidades de las potencias ocupantes de garantizar el acceso a suministros médicos y a sistemas de salud en funcionamiento para las poblaciones bajo su control.

mecanismos esenciales para garantizar el derecho a la educación en contextos de conflicto^{12 13}.

Debe prestarse especial atención al uso de los alimentos y el agua como armas de guerra. El Comité debería condenar firmemente estas prácticas, documentadas en múltiples contextos como Yemen, Congo, Sudán o Palestina, y afirmar que la destrucción deliberada de sistemas alimentarios y el uso del hambre como método de guerra constituyen graves violaciones de los DESC y del derecho internacional. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el conflicto armado es el principal impulsor del hambre a nivel mundial¹⁴.

733 MILLION	3.1 BILLION	60%	\$2.7 trillion
people hungry globally (AO SOFI 2024)	cannot afford a healthy diet (FAO)	of the hungry live in conflict zones (WFP)	global military spending in 2024 (SIPRI)

Sources: FAO State of Food Security 2024 | WFP Global Report 2024 | SIPRI Military Expenditure Database 2024

¹²Además, la violencia dirigida contra eventos culturales, ceremonias y sitios religiosos o patrimoniales debe entenderse como una grave violación del derecho a participar en la vida cultural y debe activar mecanismos internacionales de rendición de cuentas. El Comité también debería reconocer que el acceso a internet y a otros medios de comunicación e información es fundamental para la supervivencia de las comunidades vulnerables y para la protección de sus DESC, señalando particularmente los casos en que las partes en un conflicto han cortado deliberadamente las líneas de comunicación.

¹³En relación con los derechos laborales, el Comité debería reafirmar que el derecho al trabajo decente debe ser respetado y garantizado sin discriminación en contextos de conflicto armado. Los Estados deben proteger a las y los trabajadores frente a abusos cometidos por empleadores y terceros, y garantizar que las disputas laborales sean abordadas con sensibilidad frente al conflicto. Debe prestarse especial atención a las situaciones en las que los empleadores recurren a fuerzas militares o de seguridad en respuesta a la organización sindical o laboral. En el incidente de la fábrica Xing Jia en Myanmar, la administración llamó a las fuerzas armadas de la junta apenas un día después de que estas mataran a 65 personas en la masacre de Hlaing Thayar, aproximadamente a 5 km de la fábrica. Las y los trabajadores se habían reunido para reclamar el pago de 15 días de salario y de horas extra adeudadas. Poco después de que se congregaran, las fuerzas de la junta llegaron y, sin ningún intercambio verbal, comenzaron a disparar munición real contra las personas reunidas. La primera persona asesinada fue la mujer que lideraba la protesta. Otros cuatro hombres fueron baleados, tres de los cuales murieron, y 17 personas fueron arrestadas. Seis de las personas detenidas fueron condenadas por un tribunal militar a tres años de prisión.

¹⁴ Documento de posición de La Vía Campesina: "Soberanía alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos del mundo", abril de 2026. Véase: <https://drive.google.com/file/d/1v2LZ8hUYmTtj65Jn-21dVv3FCkTbGvtA/view>

En este sentido¹⁵, el Comité debería llamar a la “desmilitarización de los sistemas alimentarios”¹⁶, incluyendo el cese de sanciones económicas, bloqueos comerciales y destrucción agrícola como instrumentos de coerción política. El reconocimiento de la soberanía alimentaria es fundamental, incluido el derecho de las comunidades a producir alimentos con dignidad, en sus propias tierras, utilizando sus propias semillas y de acuerdo con sus propias prácticas culturales. Esto es especialmente relevante considerando que los conflictos armados muchas veces son aprovechados para imponer privatización y desregulación, asegurando que los mismos actores poderosos, principalmente radicados en el Norte Global, sean quienes reconstruyan y promuevan nuevas tecnologías para los sistemas de producción de alimentos y servicios.

Cuando la tierra, el agua, las semillas, los minerales y otros recursos esenciales se convierten en recursos escasos y comercializables, y los Estados poderosos perciben amenazado su suministro, los conflictos armados son utilizados como instrumento para apropiarse de dichos recursos. En este sentido, el Comité debería afirmar que los conflictos armados no deben dar lugar al empobrecimiento o despojo de las poblaciones afectadas, especialmente de grupos ya marginados, y que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir tales consecuencias. Esto debe incluir reparaciones integrales por los daños causados, así como la prohibición del despojo de tierras durante y después del conflicto, y la prohibición de destruir tierras.

Es fundamental centrarse en el derecho a la autodeterminación, incluidas sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales, tal como se reconoce en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo¹⁷. Esto incluye los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos bajo dominación colonial, ocupación extranjera o subordinación racial a determinar libremente su condición política y perseguir su desarrollo. En este contexto, los Estados deben respetar y proteger los derechos sobre la tierra, incluidos los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y adoptar medidas para asegurar sistemas de tenencia de la tierra, particularmente para

¹⁵ Según las Naciones Unidas, acabar con el hambre para 2030 costaría 93 mil millones de dólares anuales, menos del uno por ciento de los 21,9 billones de dólares destinados a presupuestos militares durante la última década. Véase: <https://news.un.org/en/story/2025/11/1166397>

¹⁶ Documento de posición de La Vía Campesina.

¹⁷ Véase la presentación colectiva de Red DESC sobre el borrador de la Observación General relativa a los DESC y la dimensión ambiental del desarrollo sostenible: <https://www.escr-net.org/resources/collective-submission-for-the-draft-general-comment-on-escr-and-the-environmental-dimension-of-sustainable-development/>

grupos marginalizados¹⁸. En consecuencia, el Comité debería destacar cómo la ocupación viola el derecho a la autodeterminación de la población ocupada¹⁹, e instar a los Estados parte y otros actores a evitar y prevenir ataques contra civiles que ejercen su autodeterminación.

El Comité debería enfatizar el derecho de las poblaciones civiles, incluso en conflictos armados no internacionales, a recibir asistencia humanitaria proveniente de la solidaridad internacional y de movimientos de solidaridad, como las flotillas que han intentado llevar ayuda a Gaza. Los ataques contra la ayuda humanitaria constituyen crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma y violaciones de la Carta de la ONU (artículos 55 y 56), y generan daños intergeneracionales²⁰.

El Comité también debería recomendar acciones internacionales coordinadas para prevenir y responder a violaciones de los DESC en contextos de conflicto armado²¹. Esto incluye el uso de presión diplomática, sanciones selectivas, restricciones al acceso a armas y sistemas financieros, embargos integrales sobre materiales que faciliten ataques contra infraestructura civil -como combustible de aviación utilizado en ataques aéreos o tecnologías de vigilancia- y detener el suministro de recursos²² que faciliten la destrucción de infraestructura vital.

¹⁸ Esto también implica prevenir la ocupación ilegal y la apropiación de los recursos naturales, promover sistemas inclusivos de uso de la tierra con una participación comunitaria significativa, y apoyar los sistemas campesinos de semillas y las prácticas agroecológicas..

¹⁹ Véase el párrafo 243 de la Opinión Consultiva, que señala cómo la ocupación prolongada agrava la violación: <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-jud-01-00-en.pdf>

²⁰ Los Estados y los organismos internacionales deben garantizar un acceso humanitario sin obstáculos, incluida la asistencia humanitaria transfronteriza para las poblaciones desplazadas, y deben exigir rendición de cuentas a los perpetradores por la destrucción deliberada de los sistemas de subsistencia de la población civil.

²¹ El artículo 1 de los Convenios de Ginebra establece que "Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias". Por lo tanto, queda claro que el Convenio impone a los Estados la obligación de actuar.

²² El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, ha llamado a los Estados a adoptar acciones estratégicas y coordinadas para obstaculizar las cadenas de suministro: "La presión diplomática y las sanciones se encuentran entre las herramientas de las que disponen los Estados. Los Estados podrían coordinar acciones para aislar al gobierno respaldado por los militares, incluso negándole legitimidad y acceso a armas y al sistema financiero internacional." Ver: [A/HRC/61/XXCRP.9 \(27 Apr 2026\) From impunity to justice: accountability for grave human rights violations in Myanmar](https://www.unhcr.org/es/refugees-and-asylum-seekers/2026/4/27/hrc-61-xxcrp.9-27-apr-2026-from-impunity-to-justice-accountability-for-grave-human-rights-violations-in-myanmar)

2. Complicidad corporativa

La intensificación de la captura corporativa de los procesos de toma de decisiones ha socavado drásticamente la gobernanza democrática, particularmente en situaciones de conflicto armado. En la toma de decisiones, las élites económicas se guían por el lucro a costa de cientos de miles de vidas y del deterioro de las condiciones de nuestro planeta.

El genocidio en Palestina y otros conflictos armados son facilitados en salas de directorio corporativas, mercados financieros y sistemas logísticos que permiten que la violencia opere a gran escala y con continuidad, haciendo que la maquinaria de los conflictos armados sea inseparable de los intereses corporativos²³.

En particular, las industrias de combustibles fósiles y militar representan dos expresiones de un mismo sistema destructivo²⁴. El poder militar depende de la energía fósil para alimentar aeronaves, vehículos y sistemas digitales, mientras que la extracción fósil frecuentemente se beneficia de la seguridad militar para proteger infraestructura y reprimir resistencias²⁵. Juntas, sostienen una forma de capitalismo fósil estructuralmente violento, extractivista y colonial en sus efectos²⁶. Los combustibles fósiles constituyen una necesidad operativa que sostiene la logística militar²⁷. Por lo tanto, el Comité debe considerar el comercio energético -con sus rutas comerciales globales, actores corporativos y sistemas financieros- como otra capa de apoyo a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los DESC.

²³ La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, sostiene en el informe "De la economía de la ocupación a la economía del genocidio" (A/HRC/59/23) que el genocidio ha dependido de la colaboración de 85 Estados y de una vasta red corporativa. Ver: <https://digitallibrary.un.org/record/4088356?v=pdf>

²⁴ Las industrias de los combustibles fósiles y militar son enormes emisoras de gases de efecto invernadero, y la industria armamentística suele estar subsidiada por los Estados. Véase la Opinión Consultiva de la CIJ sobre cambio climático, que aborda el problema de los subsidios estatales a los combustibles fósiles: <https://www.icj-cij.org/case/187>

²⁵ En algunos casos, los sitios de extracción de combustibles fósiles solo pasan a estar disponibles para las empresas tras una agresión militar, como ocurre con las reservas de petróleo y gas offshore frente a Gaza. Ver: <https://www.alhaq.org/advocacy/22619.html>

²⁶ Para comprender mejor las implicancias de la industria de los combustibles fósiles en el contexto de la crisis climática, véase:

<https://www.escr-net.org/resources/cop-30-policy-brief-centering-peoples-led-solutions-our-common-agenda-for-a-decolonized-climate-future/> [en particular, el punto 5 de la nota informativa de ESCR-Net para la COP30 (págs. 11-12), que aborda los costos ambientales del militarismo].

²⁷ Ana Sánchez Mera (2026). "The Economy of Genocide : Fossil capitalism, corporate complicity and the infrastructures of violence in Palestine", en:

<https://www.brennpunkt.lu/en/the-economy-of-genocide-fossil-capitalism-corporate-complicity-and-the-infrastructures-of-violence-in-palestine/>

Las responsabilidades se fragmentan entre subsidiarias, contratos y cadenas de subcontratación, mientras que los marcos de cumplimiento frecuentemente no previenen el daño. La violencia puede así externalizarse mientras las ganancias permanecen blindadas de las consecuencias. El Comité debería recordar que los actores no estatales tienen el deber de respetar el PIDESC y deben rendir cuentas si participan en su violación. En particular, debería aclarar y ampliar la interpretación de las obligaciones que tienen las corporaciones en contextos de conflicto armado. El Comité debe alentar la participación de los Estados en las negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos²⁸.

Este orden global violento desvía recursos estatales lejos de servicios públicos esenciales, afianzando sistemas coloniales que se benefician de los conflictos, las ocupaciones ilegales y la destrucción planetaria. Además, la energía se ha convertido cada vez más en una herramienta mercantilizada de guerra, en lugar de una herramienta para realizar los DESC. En distintos países, como Cuba, Ucrania o Palestina, el acceso al combustible y la electricidad se utiliza para disciplinar poblaciones y moldear resultados políticos.

El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha expuesto el rol de las corporaciones en el sostenimiento del apartheid y la ocupación en Palestina, y se han logrado victorias concretas²⁹. El Comité debería reafirmar demandas clave de la sociedad civil hacia las corporaciones respecto de responsabilidades en la cadena de suministro y

²⁸ Ver "ESCR-Net's Red Lines: Principles and Legal Protections that States Must Include in the Legally Binding Instrument to Stop Corporate Impunity", particularmente, el punto 2.4. "Protection in Conflict-Affected Areas":

<https://www.escr-net.org/resources/red-lines-urgent-action-needed-for-a-binding-treaty-to-end-corporate-impunity/>

²⁹ Además, existen importantes informes emitidos por las Naciones Unidas, incluidos la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Asentamientos Israelíes de 2013 y la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de 2016. Sin embargo, estas recomendaciones no han sido implementadas. Ver:

<https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session19/israeli-settlements-in-the-opt>
&
<https://www.un.org/webcast/pdfs/SRES2334-2016.pdf>

políticas que pueden adoptarse³⁰. También debería amplificar las demandas de la campaña colectiva “Global Energy Embargo for Palestine (GEEP)”³¹.

El Comité debería exhortar a los Estados a establecer regulaciones, marcos reforzados de debida diligencia y rendición de cuentas³², así como políticas de desinversión y desvinculación para corporaciones, con participación de la sociedad civil, a fin de detener la impunidad corporativa e interrumpir relaciones comerciales y el suministro de armas, tecnologías, combustibles e insumos que forman parte de la infraestructura militar y de vigilancia necesaria para desarrollar conflictos armados. Esto puede implicar la recomendación de un menú de medidas que los Estados deben desarrollar, incluidas sanciones a corporaciones y otros Estados cómplices de genocidio, crímenes de guerra y otras atrocidades mediante el suministro, financiamiento o lucro derivado de tales agresiones, y asegurar su exclusión de relaciones comerciales y de inversión. El Comentario General debe articular claramente las obligaciones extraterritoriales de derechos humanos de los Estados, incluida su responsabilidad de regular y sancionar a corporaciones por los daños que causan y la urgente necesidad de sistemas jurídicos nacionales que prohíban la influencia de actores corporativos y élites económicas en los procesos de toma de decisiones. Del mismo modo, los procesos multilaterales en la ONU y otros organismos internacionales deben protegerse de la influencia corporativa³³.

³⁰ HSBC se desvinculó de Elbit Systems, fabricante israelí de armamento, tras prolongadas campañas que señalaron los vínculos financieros del banco con empresas que suministran armas utilizadas contra la población palestina. Las campañas dirigidas contra G4S por su papel en las prisiones israelíes y en la infraestructura de puestos de control contribuyeron a la pérdida de contratos y a decisiones de desinversión en varios países. La suspensión de las exportaciones de carbón desde Colombia hacia Israel ha demostrado que incluso los flujos energéticos, frecuentemente considerados intocables, pueden ser interrumpidos cuando la presión política se vuelve imposible de ignorar.

³¹ Ver: <https://palenergyembargo.com/>

³² Antes del inicio de las actividades empresariales —teniendo en cuenta que en determinados contextos de conflicto las empresas no deberían ingresar— y durante todas las fases de las operaciones, debe garantizarse que estas no causen directamente, contribuyan ni estén directamente vinculadas con abusos o violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario derivados de las actividades empresariales o de las relaciones contractuales en toda la cadena de valor, incluidos los productos y servicios. Las entidades que ya operan en zonas afectadas por conflictos, incluidas situaciones de ocupación, deberán adoptar e implementar medidas urgentes e inmediatas, tales como políticas de desinversión y desvinculación cuando sus actividades estén beneficiando a los opresores.

³³ Como ocurrió con el Convenio Marco para el Control del Tabaco. La captura corporativa de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales es evidente en la creciente participación de actores privados en decisiones que afectan los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos, bajo la apariencia del multilateralismo de múltiples partes interesadas (“multistakeholderism”). Esto plantea un riesgo real para el avance de los DESC, particularmente en el contexto de los conflictos armados, que a menudo están impulsados por márgenes de ganancia.

3. Efectos de los conflictos armados sobre los DESC en los países del Sur Global: profundización de las desigualdades

La crisis económica causada por los conflictos armados puede observarse no solo en la escasez de combustible, sino también en el encarecimiento de los alimentos y en capacidades fiscales llevadas al límite en los países del Sur Global. Tras la incursión militar estadounidense en Irán, los precios internos de la gasolina en muchos países africanos aumentaron un 50%³⁴, y los precios de fertilizantes subieron más de un 40%, justo al inicio de la temporada de siembra en África Occidental y Central, lo que puede conducir fácilmente a una crisis de cosechas y alimentaria³⁵. En India, el gobierno se encuentra intentando asegurar suministros de emergencia antes de la temporada de siembra de junio³⁶. Los Estados, individualmente, tienen capacidades muy limitadas para reaccionar a este panorama global: en algunos casos pueden desplegar subsidios para proteger a los consumidores de los aumentos más severos de precios, pero para hacerlo deberán endeudarse a altas tasas de interés y, en muchos casos, eso será imposible, dado que muchos países ya enfrentan profundas restricciones fiscales.

Con los costos de servicio y repago de deuda ya elevados, esta dinámica se está convirtiendo en uno de los rasgos más crueles de las consecuencias globales de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán para los países del Sur Global³⁷. El Comité debería investigar los impactos globales de la guerra y del aumento del gasto militar sobre la realización de los DESC, sobre las desigualdades entre y dentro de los países, sobre el cambio climático y sobre el camino hacia una transición energética justa y equitativa.

El Comité debería enfatizar el principio de responsabilidades diferenciadas y aclarar que los Estados que impulsan, permiten o se benefician de economías de guerra deben

³⁴ Muchas economías africanas son importadoras netas de petróleo y gas, lo que las deja altamente expuestas a cualquier interrupción en las cadenas de suministro de Oriente Medio. Incluso países productores de petróleo como Nigeria están sufriendo las consecuencias de la guerra en sus precios. Véase: <https://www.project-syndicate.org/commentary/iran-war-costs-for-africa-confirms-global-financial-architecture-is-broken-by-yemi-osinbajo-2026-04>

³⁵ Dado que aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial de fertilizantes pasa por el Estrecho de Ormuz.

³⁶ Ver:

<https://www.project-syndicate.org/commentary/iran-war-costs-for-africa-confirms-global-financial-architecture-is-broken-by-yemi-osinbajo-2026-04>

³⁷ Que esperaban tasas de interés más bajas, lo cual actualmente es impensable dadas las presiones inflacionarias..

reparar los daños ambientales, fiscales y sociales generados por conflictos armados en otros Estados, incluidos aquellos daños que menoscaban su capacidad para cumplir los DESC. El Comentario General debería articular el vínculo causal entre las políticas macroeconómicas neoliberales, frecuentemente impuestas en contextos de guerra y reconstrucción posconflicto, y la violación de los DESC de las personas en los países del Sur Global. Asimismo, el Comité debería subrayar las responsabilidades históricas de los países del Norte Global e instar a los Estados a cumplir el compromiso largamente incumplido de destinar el 0,7% del PNB a la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD)³⁸, meta que podría alcanzarse fácilmente reduciendo los presupuestos militares y de defensa nacional, y aquellos destinados a alianzas militares como la OTAN³⁹.

El Comité debería apoyar el desarrollo y adopción de una Convención Marco de la ONU sobre Deuda Soberana, que coloque los derechos humanos en el centro y promueva la transformación de las Instituciones Financieras Internacionales para permitir asignaciones máximas de recursos disponibles para la realización de los DESC⁴⁰. El Comentario General debería abordar la responsabilidad de las políticas dañinas del FMI, especialmente sus condicionalidades sobre los DESC, así como las obligaciones del FMI de respetar los derechos humanos conforme a la Carta de la ONU⁴¹. También debería alentar a los Estados del Sur Global a fortalecer la cooperación Sur-Sur para construir

³⁸ El proceso es el opuesto: una reversión de décadas de avances con el colapso de la ayuda internacional. Apenas unos días antes de las Reuniones de Primavera, la OCDE anunció que la Asistencia Oficial para el Desarrollo se ha reducido en casi un 25 %, la caída más pronunciada de la historia reciente. Ver: https://www.eurodad.org/spring_meetings_2026_response

³⁹ Aunque reconocemos que la AOD puede cubrir solo una parte de la deuda colonial que los países del Norte Global tienen con el Sur Global, existe margen para discutir mecanismos adicionales, como subvenciones y transferencias financieras y técnicas no generadoras de deuda para que los países del Sur Global apoyen su capacidad material de cumplir con sus obligaciones en materia de DESC. Asimismo, la promoción de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, la cancelación de deudas odiosas o ilegítimas vinculadas al colonialismo, la garantía del derecho a suspender pagos en contextos de guerra o conflictos armados, y la prevención del sobreendeudamiento, de modo que los Estados particularmente afectados por la carga de la deuda puedan asignar recursos adecuados a la reconstrucción en escenarios de posguerra y abstenerse de adoptar medidas de austeridad.

⁴⁰ Esto implica una variedad de opciones para superar la crisis, incluyendo la cancelación de la deuda y procesos predecibles, justos e inclusivos que puedan reunir a todos los acreedores (bilaterales, multilaterales y privados) y a los deudores en la misma mesa.

⁴¹ Esto implica, entre otras obligaciones, políticas de debida diligencia para garantizar que la financiación no permita que regímenes involucrados en conflictos armados prolonguen e intensifiquen ataques contra la población civil ni afecten negativamente la protección y el cumplimiento de los DESC. Debe prestarse especial atención a evitar préstamos y subvenciones que habiliten a dichos regímenes a perpetrar violencia al tiempo que endeudan al país. Asimismo, las instituciones financieras deben adoptar medidas para prevenir el lavado de dinero y las transferencias financieras ilícitas por parte de regímenes con el fin de obtener armas y los medios utilizados para atacar deliberadamente a la población civil y sus DESC.

sistemas alimentarios, energéticos y sanitarios independientes de estructuras comerciales imperiales.

4. Efectos del rearme global sobre los DESC

El Comité debería abordar las implicancias del aumento del gasto militar para los derechos humanos y reafirmar que la desmilitarización, el desarme y la redistribución equitativa de recursos son esenciales para la realización de los DESC y una transición justa y equitativa. El rearme global tiene impactos extraterritoriales sobre los DESC y erosiona los DESC en contextos nacionales al desviar presupuesto que debería destinarse a su realización⁴². El Comité debería reafirmar que este uso de fondos públicos incumple la obligación estatal de utilizar el máximo de los recursos disponibles para los DESC, dado que el aumento del gasto militar tiene costos de oportunidad en educación, salud y bienestar social.

El gasto militar mundial ha aumentado sostenidamente desde principios de los años 2000⁴³, con incrementos significativos tras las guerras en Ucrania y Gaza⁴⁴. En 2025, el gasto militar alcanzó los 2,88 billones de dólares estadounidenses, marcando el undécimo año consecutivo de crecimiento y el nivel de gasto más alto jamás registrado⁴⁵, mientras que la FAO estima que erradicar el hambre en el mundo costaría 267 mil millones de dólares por año. El Comité debería abordar el problema del creciente gasto militar y las posibles asignaciones presupuestarias a gasto social solicitando sistemáticamente a los

⁴² Las guerras dañan la infraestructura material e inmaterial necesaria para la realización de los DESC y, al mismo tiempo, empujan a los Estados hacia un endeudamiento más profundo y privan a los presupuestos nacionales de recursos para sostener y/o reconstruir dicha infraestructura. Esto es evidente en el caso de Myanmar. La deuda nacional de Myanmar ha aumentado un 50% desde el golpe de Estado de 2021, mientras que el gasto en salud y educación ha disminuido. El PIB de Myanmar, que cayó un 18% inmediatamente después del golpe, se encuentra un 50% por debajo de su trayectoria esperada. A pesar de la realización de elecciones que privaron del derecho al voto a más de 10 millones de personas, fueron boicoteadas por millones más y fueron ampliamente criticadas por su falta de carácter democrático, el gobierno formado por la junta es ilegítimo y no representativo, y no tiene, en derecho internacional, la potestad de contratar o endeudarse en nombre del Estado. Declarar que todos los instrumentos de deuda emitidos por la junta son "odiosos" puede poner en duda que sean honrados por futuros gobiernos legítimos de Myanmar. Esto también podría desincentivar el apoyo financiero a la junta tanto por parte de Estados como de entidades dentro de Myanmar que colaboran con su gobierno de facto. Véase: Sean Turnell (2025). "The Military, Money, and Myanmar: Breaking the Nexus": <https://specialadvisorycouncil.org/wp-content/uploads/2025/02/SAC-M-The-Military-Money-Myanmar-ENGLISH.pdf>

⁴³ Lo que también incluye el aumento de políticas y tecnologías de seguridad y vigilancia, fenómenos asociados al creciente militarismo que el Comité también debería tener en cuenta.

⁴⁴ Ver: <https://drive.google.com/file/d/1v2LZ8hUYmTtj65Jn-21dVy3FCKtbGvtA/view>

⁴⁵ Ver: https://demilitarize.org/media_news/new-sipri-data-the-world-spent-2-88-trillion-in-the-military-in-2025/

Estados información sobre la evolución, durante los últimos 10 años, de áreas relevantes para los DESC, incluidos los gastos militares como porcentaje del producto interno bruto y del presupuesto público⁴⁶.

En este contexto, la Observación General Nº 3 (1990) del CESCR sigue siendo relevante al señalar que “toda medida deliberadamente regresiva (...) requeriría la consideración más cuidadosa y debería justificarse plenamente”. El artículo 26 de la Carta de la ONU establece que los Estados deben mantener la paz y la seguridad internacionales “con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia armamentos”. La Declaración del Comité DESC de 2016 sobre deuda pública y medidas de austeridad sugiere evaluaciones de impacto en derechos humanos previas al presupuesto, seguimiento de impactos distributivos, cláusulas de caducidad y revisiones periódicas para medidas excepcionales.

Este marco proporciona una base para que el Comité responsabilice a los Estados que impulsan el rearme global por el uso de equipamiento militar, complejos industriales militares y tecnologías de hipervigilancia, incluido el uso de inteligencia artificial con fines militares y de control social en contextos de conflicto armado.

El Comité debería afirmar que el rearme global intensifica la crisis climática, la cual está interconectada con la realización de los DESC, y aclarar las obligaciones de los Estados de evaluar, prevenir y remediar los impactos ecológicos de la expansión militar, las industrias armamentísticas y el extractivismo vinculado a conflictos, incluidos sus impactos transfronterizos e intergeneracionales. El Comité también debería exhortar a los Estados a reorientar los presupuestos militares hacia la realización de los DESC, incluidos sistemas de salud accesibles, soluciones comunitarias a la crisis climática, soberanía alimentaria y programas de resiliencia agrícola en zonas afectadas por conflictos armados. Estas medidas deben ir acompañadas de mecanismos de rendición de cuentas.

⁴⁶ El gasto militar mundial aumentó en 2025 a pesar de una disminución del gasto de Estados Unidos, el mayor país gastador del mundo. Un fuerte incremento del gasto en Europa y el crecimiento continuo en Asia y Oceanía compensaron la reducción del gasto estadounidense durante el año. El gasto militar mundial, excluyendo a Estados Unidos, creció un 9,2 % en 2025. El gasto militar de Estados Unidos cayó a 954.000 millones de dólares en 2025 (lo que representa aproximadamente el 33 % del gasto global), mientras que el gasto de China aumentó un 7,4 % hasta un estimado de 336.000 millones de dólares. Los cinco mayores países gastadores en 2025 fueron Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India, que en conjunto representaron el 58 % del gasto militar mundial. En 2025, el gasto total de los 32 miembros de la OTAN superó los 1,58 billones de dólares y representó el 55 % del total mundial, mientras que el gasto de Estados Unidos equivale al 60 % del total de la OTAN.

5. Efectos de posguerra y construcción de paz con enfoque en DESC

La justicia transicional para la construcción de paz ha ignorado históricamente los DESC⁴⁷. El Comité debe posicionar las violaciones de los DESC como igualmente importantes que otras violaciones de derechos humanos para construir un camino hacia la paz, la reparación, la sanación y la justicia. Reconociendo que las violaciones de los DESC suelen constituir señales tempranas de conflicto, el Comité debería enfatizar la importancia de acciones preventivas que aborden las causas estructurales de los conflictos armados, incluidas la desigualdad, el extractivismo, la exclusión y las injusticias climáticas⁴⁸.

El Comentario General debería afirmar que los programas de construcción de paz y los esfuerzos de reconstrucción posconflicto deben basarse en la justicia reparadora, la restauración de sistemas ecológicos y de cuidados, soluciones lideradas por las comunidades, la autodeterminación y los DESC en general, incluido el fortalecimiento de los sistemas de salud. El Comité, por lo tanto, debería instar a los Estados a garantizar la participación y liderazgo significativos de las comunidades históricamente oprimidas y subordinadas, especialmente en el Sur Global, en el diseño de procesos de reconstrucción y transición justa.

Los Estados que poseen deuda soberana o son sede de acreedores privados que imponen cargas de deuda tienen el deber de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los Estados endeudados puedan asignar de manera equitativa el máximo de recursos disponibles hacia la plena realización de los DESC en respuesta al escenario

⁴⁷Su enfoque ha estado en las violaciones de los derechos civiles y políticos como las principales violaciones graves de derechos humanos que deben abordarse al buscar justicia por atrocidades pasadas. Ver: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016934411403200205>

⁴⁸ Es necesario garantizar la rendición de cuentas y la justicia transicional para abordar tanto las violaciones deliberadas de los DESC resultantes de conflictos o represión, como también las violaciones estructurales que han actuado como causas profundas de los conflictos dentro del Estado. Esto permitirá profundizar la comprensión de la contribución que los DESC pueden realizar a la consolidación de la paz mediante mecanismos preventivos con visión de futuro, y no solo como un medio para abordar violaciones pasadas. El Comité debería alentar a los Estados parte a incorporar los DESC en sus estrategias de evaluación de riesgos, alerta temprana y en las medidas más amplias de prevención de conflictos, por ejemplo, abordando las reclamaciones basadas en violaciones de DESC como parte de los procesos de mediación.

de posguerra. Esto incluye introducir leyes nacionales que obliguen a acreedores privados a participar en mecanismos o esquemas de cancelación de deuda⁴⁹.

El Comité debería desarrollar un marco para comprender el significado y alcance de las reparaciones integrales en escenarios de posguerra, en consulta con las comunidades afectadas. Las reparaciones deben abordar la destrucción de ecosistemas, medios de vida y daños a la salud y al ambiente causados por conflictos armados, considerando los derechos de las generaciones futuras⁵⁰.

El Comité debería reafirmar remedios específicos que los Estados deben reconocer, especialmente mecanismos comunitarios de resolución de disputas, asegurando que proporcionen formas justas, confiables, accesibles y no discriminatorias de resolver rápidamente disputas en los procesos de construcción de paz.

Finalmente, y con el fin de reparar el daño multidimensional causado, el Comité debería alentar a los Estados a planificar e implementar reformas redistributivas de la tierra tras situaciones de conflicto armado, con el objetivo de remediar y compensar a comunidades desposeídas. Los Estados también deberían incentivar enfoques agroecológicos para la gestión de tierras, reconociendo el liderazgo de las mujeres, con el objetivo de regenerar suelos, restaurar la biodiversidad y garantizar la soberanía alimentaria.

⁴⁹ Los Estados deben garantizar que todo desarrollo posterior a conflictos que involucren a actores no estatales, como instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo y empresas privadas, considere los DESC como una prioridad y lleve a cabo evaluaciones de impacto en derechos humanos, medio ambiente y género, así como debida diligencia.

⁵⁰ Esto implica restringir la extracción de recursos actual y los patrones insostenibles de consumo y producción para garantizar el disfrute de los DESC, así como la obligación de reparar las pérdidas y los daños en materia de DESC y por daños ambientales.

Anexo: Estudios de caso relevantes

Estudio de caso 1: Papúa Occidental (pérdida de soberanía, extracción de recursos y desplazamiento de pueblos indígenas).

En 1961, los papúes occidentales declararon su independencia de los Países Bajos, pero fueron invadidos por Indonesia, que estaba interesada en sus recursos naturales. Tras la invasión, en 1968, la ONU y Estados Unidos supervisaron el proceso mediante el cual el gobierno indonesio seleccionó a una fracción de la población de Papúa Occidental y la obligó a votar a favor de la anexión a Indonesia⁵¹. Estados Unidos y la ONU permitieron esta anexión para debilitar al partido comunista indonesio en el contexto de la Guerra Fría y acceder a los recursos naturales de Papúa Occidental (como oro, cobre y gas natural)⁵². De este modo, los esfuerzos de descolonización de la ONU estuvieron siempre controlados por el Norte Global⁵³. Hacia el final de la Guerra Fría, dichos esfuerzos disminuyeron, y la ONU no apoyó la independencia de Papúa Occidental, negando que se trate de un territorio colonizado⁵⁴. Esta negación ha privado a los papúes occidentales de recursos de la ONU para impulsar su lucha por la autodeterminación.

Un grupo de indígenas papúes occidentales estableció el Movimiento Papúa Libre (OPM) en 1962 y posteriormente creó el Ejército de Liberación de Papúa Occidental (TPNPB) en 1973, con el objetivo de liberar el territorio de la ocupación indonesia. La negativa de la ONU a reconocer esta lucha también ha contribuido al empeoramiento de graves violaciones de derechos humanos en Papúa Occidental bajo control indonesio, sin que la ONU haya intervenido hasta el momento⁵⁵.

⁵¹ Kluge, E. (2020). West Papua and the International History of Decolonization, 1961-69. *The International History Review*, 42(6), 115-1172. <https://doi.org/10.1080/07075332.2019.1694052>.

⁵² Walton, A.A. (2005). *Papua: Another East Timor?* Foreign Policy in Focus. <https://fpif.org/papua-another-east-timor/>; Kluge, E. (2020, January 23). *How the world failed West Papua in its campaign for independence*. The Conversation. <https://theconversation.com/how-the-world-failed-west-papua-in-its-campaign-for-independence-129623>

⁵³ Doherty, B. & Lamb, K. (2017, September 30). West Papua independence petition is rebuffed at UN. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/30/west-papua-independence-petition-is-rebuffed-at-un>; Kluge, Emma. (2025). Papuan petitions as an archive of decolonisation. *The Journal of Imperial and Commonwealth History*, 53(3), 658-683. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03086534.2025.2500357#d1e501>

⁵⁴ Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁵⁵ Srinivasan, P. (2016). How the UN failed West Papua. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/09/how-the-un-failed-west-papua/>

A finales de la década de 1960, Indonesia se asoció con la empresa minera estadounidense Freeport McMoRan, creando la empresa conjunta PT Freeport Indonesia para desarrollar proyectos mineros en Papúa Occidental⁵⁶. Indonesia obtuvo importantes ingresos fiscales, tarifas y participaciones, mientras que la empresa estadounidense consiguió acceso al territorio⁵⁷. El ejército también protege estos proyectos mineros⁵⁸. La ocupación ha sido calificada como un “genocidio a cámara lenta”, con alrededor de medio millón de civiles papúes desplazados internamente desde 1969⁵⁹, así como un “ecocidio” impulsado por operaciones mineras a gran escala y plantaciones de aceite de palma⁶⁰.

La política de transmigración de Indonesia trasladó a más de 300.000 indonesios a Papúa Occidental entre 1972 y 2000, desplazando a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y facilitando el control estatal sobre los recursos naturales⁶¹. Los papúes indígenas, especialmente las mujeres desplazadas internamente, tenían múltiples fuentes de ingreso en sus tierras, pero han perdido sus medios de vida debido a la militarización⁶². Actualmente, los migrantes dominan el mercado laboral en Papúa Occidental⁶³.

⁵⁶ Taylor, N. (2011, October 19). West Papua: A history of exploitation. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/opinions/2011/10/19/west-papua-a-history-of-exploitation>

⁵⁷ Taylor, N. (2011, October 19). West Papua: A history of exploitation. *Aljazeera*. <https://www.aljazeera.com/opinions/2011/10/19/west-papua-a-history-of-exploitation>

⁵⁸ Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁵⁹ Catholic Justice and Peace Commission of the Archdiocese of Brisbane. (2016, May 1). *We will lose everything: A report on human rights fact finding mission to West Papua*.

<https://cipcbrisbane.com/wp-content/uploads/2016/05/we-will-lose-everything-may-2016.pdf>

⁶⁰ Hutapea, T. (2025, May 19). We are witnessing ecocide in West Papua, one of the world's richest biodiversity centres. *Civicus*.

<https://lens.civicus.org/interview/we-are-witnessing-ecocide-in-west-papua-one-of-the-worlds-richest-biodiversity-centres/>; NEPCon. (2017, August). *Palm oil risk assessment: Indonesia - West Papua*.

<https://www.preferredbynature.org/sites/default/files/library/2017-09/NEPCon-PALMOIL-Indonesia-West-Papua-Risk-Assessment-EN-V1.pdf>; World Rainforest Movement. (2024, August 22). The insane expansion of industrial oil palm in the land of Papua,

and the resistance struggle of Kampung Bariat. <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/the-insane-expansion-of-industrial-oil-palm-in-the-land-of-papua-and-the-resistance-struggle-of-kampung-bariat>; Center for Creative Ecologies. (2018, March). West Papua conflict: from genocide to ecocide: An interview with Nabil Ahmed.

<https://creativeecologies.ucsc.edu/west-papua-conflict-from-genocide-to-ecocide/>

⁶¹ International Parliamentarians for West Papua. (2024, October 29). Transmigration to West Papua: IPWP statement. <https://www.ipwp.org/statements/transmigration-to-west-papua-ipwp-statement/>

⁶² Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁶³ International Parliamentarians for West Papua. (2024, October 29). Transmigration to West Papua: IPWP statement. <https://www.ipwp.org/statements/transmigration-to-west-papua-ipwp-statement/>

El ejército indonesio refuerza y agrava el racismo, la discriminación y la estigmatización que sufren los papúes indígenas, especialmente las mujeres desplazadas⁶⁴. Debido a esto, ellas y sus comunidades enfrentan dificultades constantes para acceder a servicios de salud, educación y oportunidades económicas. Rasgos como llevar rastas o tener piel más oscura pueden hacer que sean etiquetadas automáticamente como “criminales” o vinculadas al movimiento de liberación. No se les permite portar objetos punzantes y sus pertenencias son saqueadas por el ejército.

La estigmatización de las personas desplazadas forma parte de una estrategia más amplia que permite al ejército cometer actos de violencia, agresión y discriminación, especialmente contra las mujeres (como violencia de género en campamentos de refugiados y violencia sexual contra mujeres desplazadas)⁶⁵. Estas mujeres también están marginadas en la participación política. Aunque existe una cuota del 30% para la participación femenina en elecciones, esta suele ser simbólica⁶⁶. En muchos casos, son los hombres quienes representan a las familias en los procesos electorales. Además, desde que los misioneros neerlandeses introdujeron el cristianismo en Papúa Occidental, el rol cultural de las mujeres cambió, y los valores patriarcales han reducido su papel dentro de la sociedad papúa⁶⁷.

Estudio de caso 2: Conflicto en Manipur, impacto de un conflicto armado prolongado y desatendido en el noreste de la India

El conflicto en el noreste de la India ha sido gravemente ignorado por las autoridades estatales y las fuerzas de gobierno. Más de 260 personas han muerto, 60.000 han sido desplazadas y miles viven en condiciones vulnerables en campamentos temporales de ayuda desde hace tres años, anhelando regresar a sus hogares y aldeas⁶⁸. En Manipur, desde el 3 de mayo de 2023, se han producido enfrentamientos entre las comunidades Meitei y Kuki-Zo, originados por desacuerdos en torno a una decisión judicial que

⁶⁴ Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁶⁵ Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁶⁶ Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁶⁷ Sorabut, A. M., Sipa, A. (2025). *Women and Their Rights in the Midst of Armed Conflict: Intan Jaya and Maybrat Cases in West Papua*. [Unpublished]. ELSHAM Papua in partnership with the Asia Pacific Forum on Women, Law and Development.

⁶⁸ Human Rights Watch. (2025) *India: Ethnic Clashes Restart in Manipur*. <https://www.hrw.org/news/2025/03/27/india-ethnic-clashes-restart-manipur>

permitió a las comunidades del valle (Meitei) comprar tierras en regiones montañosas circundantes habitadas principalmente por comunidades tribales, incluidas Kuki y Zotah. Las comunidades tribales e indígenas sostienen que los Meitei ya tienen una gran influencia y representación en las instituciones estatales y en el acceso a recursos, por lo que permitirles adquirir más tierras aumentaría las desigualdades existentes.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce que los derechos en el marco de los DESC derivan de la dignidad inherente de la persona humana, así como los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como base de la libertad, la justicia y la paz. Sin embargo, durante los conflictos armados, las mujeres suelen ser las primeras en ser despojadas de su dignidad como parte de tácticas de represalia. En mayo de 2023, dos mujeres Kuki-Zo fueron desnudadas, exhibidas y violadas en grupo por una turba en el distrito de Thoubal, en Manipur —un ataque en el que el hermano y el padre de una de las sobrevivientes fueron asesinados—, y tres de los acusados siguen prófugos.

Las comunidades de toda la región de Manipur perciben profundamente la indiferencia tanto de las autoridades centrales como estatales. En los últimos tres años han aumentado los linchamientos, los asesinatos selectivos de figuras religiosas y las muertes de civiles. Los reclamos de la población por responsabilidad gubernamental y protección de civiles han sido ignorados⁶⁹. Manipur ha sufrido uno de los bloqueos de internet más prolongados en comparación con otros estados de la India, implementado en gran medida para evitar que noticias perturbadoras salgan al exterior. En general, India ha descendido en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, situándose en el puesto 156 de 180 países.

La salud y el bienestar (físico, mental y emocional), la educación y la estabilidad social de las comunidades se han visto gravemente afectados. Un miembro de APWLD del noreste de la India comparte: “El conflicto ha generado desconfianza entre comunidades, ha estimulado más violencia, ha provocado desplazamientos y ha incrementado la desnutrición entre niños pequeños y bebés. También ha llevado a la ruptura de los tejidos sociales y culturales. Las mujeres, que tradicionalmente dependían de sus hermanas, amigas y vecinas para el apoyo mutuo, han perdido estas redes esenciales. Esto es

⁶⁹The Wire. April (2026). *Manipur Needs No More Repression or Coercion. It Needs a Deeper Understanding.* <https://thewire.in/security/manipur-needs-no-more-repression-or-coercion-it-needs-a-deeper-understanding>

especialmente evidente en el estado vecino de Manipur, donde las mujeres desempeñan un papel clave en el sostenimiento de la economía y los mercados locales. El conflicto ha interrumpido sistemas de dependencia y cadenas de suministro de larga data. Muchas personas luchan por su identidad y autodeterminación, lo que ha resultado en la muerte de muchos hombres durante los enfrentamientos, dejando viudas y niños creciendo sin padres. Con oportunidades de sustento limitadas, muchas mujeres —madres, esposas, hermanas e hijas— se han visto obligadas a recurrir al contrabando de drogas desde países vecinos para sobrevivir.”

El conflicto en el noreste suele percibirse a través del prisma de la insurgencia y la militancia. Sin embargo, no debe pasarse por alto que también existen profundas luchas relacionadas con aspiraciones e intereses económicos, sociales y culturales. Las disputas sistemáticas de poder a distintos niveles —entre individuos, comunidades, aldeas tribales y diversos actores— por recursos, tierras y asentamientos están impulsando a muchas personas a tomar las armas. Miembros de APWLD señalan que persiste intensamente una mentalidad colonial y que, incluso después de 78 años de independencia de la India, muchas comunidades no se sienten plenamente liberadas ni en paz. El ciclo de conflicto armado y violencia continúa, impidiendo una armonía y reconciliación duraderas.

Estudio de caso 3: Minería de bauxita en el centro de la India

El caso de Tijmali, en Odisha (India), se centra en la lucha de las comunidades indígenas Kandha Adivasi y otros pueblos dependientes del bosque contra un proyecto propuesto de minería de bauxita por parte de Vedanta Limited. Tijmali, ubicado en la cordillera de Gandhamardan en los Ghats Orientales, está rodeado por unas 45 aldeas en los distritos de Rayagada y Kalahandi. Para estas comunidades, la montaña no es solo un depósito mineral; es un espacio sagrado vivo, morada de su deidad Tij Raja, y una fuente vital de agua, bosques, alimentos, medios de vida, cultura e identidad espiritual. Cerca de 100 arroyos permanentes nacen en la zona, sosteniendo a adivasis, dalits, agricultores, habitantes del bosque y trabajadores agrícolas. Por lo tanto, la minería en Tijmali amenaza las bases ecológicas, culturales y económicas de la vida comunitaria.

El conflicto se intensificó después de que Vedanta recibiera en febrero de 2023 una concesión de 30 años para extraer bauxita en 1.549 hectáreas. El proyecto está vinculado a la refinería de aluminio de Vedanta en Lanjigarh y a cadenas de suministro globales

relacionadas con la construcción, tecnologías digitales, la industria aeroespacial y militar. Esto refleja un patrón más amplio en el que los territorios indígenas son tratados como zonas de sacrificio para el beneficio corporativo y la expansión industrial. Por ello, la resistencia comunitaria no es solo una oposición ambiental, sino una lucha por la autodeterminación, los derechos sobre la tierra, la supervivencia cultural y la justicia en el desarrollo.

La autodeterminación es central en el caso de Tijmali. Según el derecho internacional de los derechos humanos, los pueblos tienen el derecho a determinar su propio desarrollo político, económico, social y cultural, controlar sus recursos naturales y no ser privados de sus medios de subsistencia. En Tijmali, el proyecto minero amenaza este derecho, ya que afectaría tierras ancestrales, bosques, arroyos, sitios sagrados, sistemas alimentarios y medios de vida. Para las comunidades Kandha Adivasi y vecinas, la autodeterminación implica la autoridad colectiva para decidir si la minería debe llevarse a cabo en sus tierras sagradas y para proteger un modelo de desarrollo basado en la tierra, el agua, la cultura, la soberanía alimentaria y el equilibrio ecológico.

Las comunidades temen que la minería seque los arroyos permanentes, destruya árboles sagrados, contamine tierras agrícolas, dañe viviendas y escuelas debido a las explosiones, y aumente el riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas debido a la presencia de trabajadores externos, militares y fuerzas de seguridad. Estos daños no solo afectan a individuos, sino que debilitan las condiciones colectivas necesarias para la supervivencia comunitaria.

El caso también revela violaciones del consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades indígenas deben poder otorgar o negar su consentimiento antes de que se aprueben proyectos que afecten sus territorios. Según denuncias, Vedanta y funcionarios estatales utilizaron intimidación para influir en los procesos de los consejos de aldea. Funcionarios distritales habrían intentado realizar reuniones ilegales y posteriormente presentaron resoluciones falsificadas que mostraban falsamente el consentimiento comunitario para la desviación de bosques. El consentimiento no puede considerarse genuino cuando las comunidades enfrentan presencia policial, presión paramilitar, toques de queda, causas penales falsas, arrestos y documentos falsificados.

La lucha de Tijmali también pone de relieve violaciones de los derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos. Las mujeres líderes y defensoras ambientales han sido fundamentales en la resistencia, defendiendo la tierra, los bosques, el agua, la identidad indígena, los sistemas alimentarios, los derechos culturales y el derecho a disentir. Debido a ello, han enfrentado criminalización, intimidación y restricciones a la organización pacífica. En agosto de 2023, se habrían presentado casos falsos contra cientos de líderes comunitarios después de que los aldeanos impidieran el acceso de funcionarios de la empresa a la cima de la colina Tijmali sin permiso del consejo local. Veinticuatro líderes pasaron presuntamente siete meses en prisión. En octubre de 2023, cientos de fuerzas paramilitares bloquearon caminos hacia una audiencia pública ambiental, restringiendo el testimonio de las comunidades.

Defensoras como Rina Majhi y Naring Dei Majhi han denunciado estas violaciones. Rina Majhi describió cómo las celebraciones del Día de los Pueblos Indígenas y el Día Mundial del Medio Ambiente fueron restringidas mediante toques de queda y órdenes prohibitivas. Naring Dei Majhi afirmó que quienes cuestionan las irregularidades de Vedanta o de las autoridades enfrentan causas falsas y arrestos. Según informes, fue arrestada el 2 de agosto de 2025 en un hospital de distrito mientras acompañaba a su nuera durante el parto, y acusada en seis casos presuntamente falsos.

A pesar de la represión, las comunidades continúan resistiendo mediante solicitudes de acceso a la información, acciones legales, objeciones ante organismos de aprobación, reuniones públicas y rituales sagrados. El caso de Tijmali demuestra que las violaciones del derecho a la autodeterminación y de los derechos de las defensoras están interconectadas. Una respuesta basada en derechos requiere la cancelación de aprobaciones obtenidas sin consentimiento genuino, el reconocimiento de los derechos forestales y comunitarios, la retirada de causas falsas, la protección de defensoras, la investigación de resoluciones falsificadas y el fin de la intimidación militarizada para las generaciones presentes y futuras⁷⁰.

⁷⁰ Nayak, S. (2025, December 18). In the line of fire: A community confronts a powerful military-industrial complex. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. <https://apwld.org/in-the-line-of-fire-a-community-confronts-a-powerful-military-industrial-complex/>

Estudio de caso 4: Bases militares de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte

Los pueblos indígenas de las Islas Marianas del Norte viven en medio de una expansión militar de Estados Unidos que amenaza su autodeterminación⁷¹. Las Islas Marianas del Norte (NMI) han experimentado una larga historia de colonización, imperialismo y militarización, con impactos significativos en las poblaciones indígenas. Desde 1970, son un territorio estadounidense y han sido utilizadas extensamente por el ejército de EE. UU. para bases, entrenamiento y pruebas, con el área de estudio de Entrenamiento y Pruebas de las Islas Marianas (MITT) ocupando la totalidad de las islas.

En la Investigación Acción Participativa Feminista por la Paz (Peace FPAR), apoyada por APWLD, mujeres indígenas de las NMI expresaron sus preocupaciones sobre el uso de la tierra y la devastación ambiental causada por las prácticas militares, así como los daños que la presencia militar genera en las comunidades y culturas indígenas. Las mujeres indígenas señalaron que el militarismo las afecta negativamente de múltiples maneras. En términos ambientales, su seguridad personal y salud (tanto humana como ambiental) están en riesgo debido a la intensa huella de carbono de la actividad militar estadounidense, la destrucción de ecosistemas biodiversos, la contaminación por pruebas de armamento y la presencia de municiones sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en las islas⁷².

El acceso a tierras ancestrales también está amenazado debido a la designación de áreas convertidas en bases militares estadounidenses. Además, la continuidad de sus costumbres y culturas indígenas se ve afectada por la militarización derivada de la colonización y el imperialismo. Por ejemplo, tierras ancestrales y sitios de enterramiento han sido profanados y se han vuelto inaccesibles al convertirse en bases militares y zonas de entrenamiento. Aunque la constitución de la isla establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra en las NMI, el ejército estadounidense ignora y vulnera este derecho al designar cada vez más áreas como sitios de pruebas, entrenamiento y bases militares.

⁷¹ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>.

⁷² APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 3. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>.

Una mujer expresó en el FPAR su temor a la “pérdida de recursos territoriales, pérdida de bienes... Si la expansión militar se concreta plenamente, perderemos la capacidad de arrendar nuestras tierras, lo que nos obligará a vender nuestro ganado o reubicarnos”⁷³. Asimismo, las mujeres indígenas temen la pérdida cultural debido al aumento del reclutamiento de jóvenes indígenas por parte del ejército estadounidense⁷⁴.

En términos de medios de vida y desarrollo económico, la población de las NMI enfrenta inseguridad alimentaria y energética, con un 52% viviendo por debajo de la línea federal de pobreza, además de una disminución del turismo, el cierre de la industria textil y altos costos de combustible⁷⁵. Algunas mujeres señalaron que son un objetivo vulnerable en caso de guerra, debido a su ubicación geográfica y su historia de colonización e imperialismo⁷⁶. También expresaron preocupación por el impacto letal del almacenamiento y transporte de armas nucleares, sus posibles daños ambientales y cómo esto haría aún más inaccesibles sus tierras ancestrales.

Asimismo, destacaron que no se respeta el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas. Las mujeres indicaron que incluso hablar públicamente sobre la militarización pone en riesgo sus empleos y reputaciones, ya que sus vidas y medios de subsistencia están entrelazados con el ejército estadounidense⁷⁷. Las

⁷³ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 4. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>.

⁷⁴ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 4. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>; US Department of Commerce. (2022, May 3). U.S. Census Bureau Releases key stats in honor of Asian American, native Hawaiian, and Pacific Islander heritage month. <https://www.commerce.gov/news/blog/2023/05/us-census-bureau-releases-key-stats-honor-2023-asian-american-native-hawaiian-and>; US Department of Defense. (2021). 2021 demographics profile of the military community. Department of Defense (DoD), Office of the Deputy Assistant Secretary of Defense for Military Community and Family Policy (ODASD (MC&FP)). <https://download.militaryonesource.mil/12038/MOS/Reports/2021-demographics-report.pdf>;

⁷⁵ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 5. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>; US Department of Health and Human Services. (n.d.). III.B. Overview of the state - Northern Mariana Islands - 2020. [https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Narratives/Overview/ad48c169-b39e-4883-84a0-ea7e5bcf9695#:~:text=Approximately%2052%20percent%20of%20the,185%20percent%20of%20poverty%20level](https://mchb.tvisdata.hrsa.gov/Narratives/Overview/ad48c169-b39e-4883-84a0-ea7e5bcf9695#:~:text=Approximately%2052%20percent%20of%20the,185%20percent%20of%20poverty%20level;);

⁷⁶ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 5. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>.

⁷⁷ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 6. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>.

concepciones de seguridad nacional de Estados Unidos se priorizan por encima de las diversas visiones de futuro de las comunidades indígenas.

Sus derechos indígenas son vulnerados, ya que la toma de decisiones en las NMI está controlada por el Departamento de Guerra (anteriormente Departamento de Defensa), el gobierno continental de EE. UU. y el ejército estadounidense, dominados por hombres blancos⁷⁸. Además, la comunidad tiene acceso limitado a información sobre la militarización y no puede votar en elecciones presidenciales ni del Congreso estadounidense, incluso siendo ciudadanos de EE. UU., lo que limita su participación significativa⁷⁹. Aunque la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) gobierna las islas, las mujeres señalan que tiene un control limitado sobre asuntos militares, considerados temas de seguridad nacional, y que el gobierno local prioriza mantener buenas relaciones con el Departamento de Guerra⁸⁰.

Estudio de caso 5: Timor Oriental (contexto de posguerra)

La participación (y no participación) de la ONU en la lucha de Timor Oriental por la independencia revela aún más quién controla en última instancia las decisiones dentro de la organización. Documentos desclasificados de Estados Unidos publicados en 2005 revelaron cómo este país permitió la invasión indonesia de Timor Oriental durante 24 años, desde 1975 hasta 1999⁸¹. En 1975, Indonesia, con el apoyo de Estados Unidos, lanzó su invasión. Estados Unidos mantuvo una política de silencio, suprimiendo noticias y debates sobre Timor Oriental, incluidas las violaciones de derechos humanos cometidas por Indonesia contra la población timorese. Posteriormente, incrementó su apoyo militar a Indonesia y evitó cualquier intervención de la ONU⁸². A finales de la década de 1970, el gobierno indonesio respaldado por Estados Unidos, liderado por el dictador Suharto,

⁷⁸ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 6. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>.

⁷⁹ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 6. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>;

⁸⁰ APWLD. (2023). Northern Mariana Islands. How does militarism impact indigenous women's self determination?, 6. <https://apwld.org/wp-content/uploads/2024/09/Peace-FPAR-Country-Briefers-Northern-Mariana-Islands-as-of-February-22.pdf>;

⁸¹ Simpson, B. (2005, November 28). A Quarter century of U.S. support for occupation. The National Security Archive. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/>

⁸² East Timor Action Network.(2000, May). U.S. policy towards East Timor. <https://etan.org/timor/uspolicy.htm>

causó la muerte de más de 200.000 timorenses debido a la guerra y la hambruna. Estados Unidos continuó suministrando armamento al gobierno indonesio bajo el pretexto de la "contrainsurgencia". Varias administraciones estadounidenses intentaron impedir que saliera a la luz información sobre la invasión para evitar restricciones al comercio de armas con Indonesia. La invasión se llevó a cabo casi en su totalidad con equipamiento estadounidense, cuyo uso fue ilegal⁸³.

En contextos de posguerra y posconflicto, el desarrollo suele estar basado en modelos neoliberales de extracción que responden principalmente a los intereses de los donantes, liderados por instituciones financieras internacionales de carácter imperial como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los países del Sur Global, necesitados de asistencia económica tras conflictos, son obligados a implementar medidas que favorecen la agenda del Norte Global, presentadas como inversión, en lugar de atender necesidades locales de recuperación como el cuidado, la salud, la igualdad de género, la educación y el acceso a la justicia, que son consideradas gasto. Se prioriza la atracción de inversión extranjera y su libre circulación, mientras que las reservas nacionales se utilizan para el pago de deudas impuestas por estas instituciones^{84,85}.

El Banco Mundial se posicionó estratégicamente en la reconstrucción de posguerra de Timor Oriental, gestionando las subvenciones proporcionadas por actores internacionales e imponiendo políticas neoliberales⁸⁶. La reconstrucción se basó en gran medida en los recursos de petróleo y gas natural del Mar de Timor, ignorando otros sectores como la agricultura y la manufactura⁸⁷. Esta fuerte dependencia no se correspondía con el contexto socioeconómico de la población timorense, en la que entre el 70% y el 80% depende de la agricultura de subsistencia, mientras que el sector de petróleo y gas ha

⁸³ AFP. (2005, December 3). US 'backed East Timor invasion. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2005/12/3/us-backed-east-timor-invasion>, Simpson, B. (2005, November 28). A Quarter century of U.S. support for occupation. The National Security Archive. <https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB174/>

⁸⁴United Nations Development Programme (2008). Post-conflict economic recovery enabling local ingenuity. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/undp-cpr-post-conflict-economic-recovery-enable-local-ingenuity-report-2008.pdf>

⁸⁵Cohn, C. & Duncanson, C. (2020). Whose recovery? IFI prescriptions for post-war states. *Review of International Political Economy*, 27(6), 1214-1234. https://www.pure.ed.ac.uk/ws/portalfiles/portal/131012158/Cohn_Duncanson2019RIPEWhoseRecovery.pdf

⁸⁶Toussaint, E. (2024, June 19). The World Bank and IMF have set their sights on East Timor, a state officially born in May 2002. Committee for the Abolition of Illegitimate Debt. <https://www.cadtm.org/The-World-Bank-and-IMF-have-set-their-sights-on-East-Timor-a-state-officially>

⁸⁷ Dal Poz, A. (2018). 'Buying peace' in Timor-Leste: Another UN-success story?. *Peace Human Rights Governance*, 2(2), 185-219. https://phrg.padovauniversitypress.it/system/files/papers/2018_2_3.pdf

generado menos del 1% del empleo. Además, los ingresos derivados de estos recursos se invirtieron principalmente en infraestructura destinada a su extracción y en empresas privadas asociadas, mientras que el gasto en salud y educación disminuyó hasta 2013.

Estudio de caso 6: Mujeres con discapacidad en el Sri Lanka posguerra

Han pasado diecisiete años desde el fin de la guerra civil de Sri Lanka en 2009, un conflicto de 26 años entre el gobierno esrilanqués liderado por la mayoría cingalesa y los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), quienes buscaban crear un Estado tamil independiente tras años de marginación⁸⁸.

La guerra dejó más de 100.000 personas muertas entre 1983 y 2009, incluyendo la masacre de alrededor de 40.000 civiles tamiles en los últimos meses del conflicto en las provincias del norte y este, de mayoría tamil. La ONU ha fallado reiteradamente en exigir responsabilidades por crímenes de guerra y genocidio contra la población tamil, incluso tras la creación del Proyecto de Rendición de Cuentas de Sri Lanka en 2021⁸⁹. Las resoluciones de la ONU han retrocedido, dejando los procesos judiciales en manos de mecanismos internos en lugar de establecer un tribunal híbrido independiente con jueces y fiscales internacionales⁹⁰. En 2012, se filtró un borrador de un informe interno de la ONU que evidenció fallas sistémicas, destacando su silencio frente a las atrocidades del gobierno esrilanqués y las violaciones en las “zonas de no fuego” durante la guerra⁹¹.

Además, Estados Unidos fue directamente cómplice al proporcionar apoyo militar y político al gobierno de Sri Lanka, en línea con sus intereses estratégicos para acceder a puertos clave y a la ubicación geográfica del país para comercio y operaciones militares⁹². Durante el proceso de paz iniciado en 2002, Estados Unidos y el Reino Unido

⁸⁸ Anandakugan, N. (2020, August 31). The Sri Lankan civil war and its history, revisited in 2020. Harvard International Review. <https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/>.

⁸⁹ Nandakumar, T. (2025, October 14). The UN's Sri Lanka failure. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2025/10/the-uns-sri-lanka-failure/>; Ganguly, M. (2024, May 14). 15 years since Sri Lanka's conflict ended, no justice for war crimes. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2024/05/14/15-years-sri-lankas-conflict-ended-no-justice-war-crimes>.

⁹⁰ McKernan, L. (2025, October 6). UN extends evidence-gathering mandate for Sri Lanka war crimes. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2025/10/06/un-extends-evidence-gathering-mandate-for-sri-lanka-war-crimes>; Nandakumar, T. (2025, October 14). The UN's Sri Lanka failure. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2025/10/the-uns-sri-lanka-failure/>.

⁹¹ Doucet, L. (2012, November 13). UN 'failed Sri Lanka civilians', says internal probe. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-20308610>.

⁹² Permanent People's Tribunal. (2013, December). People's Tribunal on Sri Lanka. https://www.ptsrilanka.org/wp-content/uploads/2017/04/ppt_final_report_web_en.pdf.

intentaron alterar el equilibrio de poder y debilitar las negociaciones⁹³. Incluso en 2007, cuando el proceso se deterioraba, EE. UU. continuó brindando apoyo pese a afirmar lo contrario públicamente⁹⁴. A través del Acuerdo de Acceso y Servicios Cruzados (ACSA), un acuerdo militar secreto, EE. UU. suministró estrategias, armas e imágenes satelitales al gobierno esrilanqués, valorando especialmente el acceso al puerto de Trincomalee en el océano Índico⁹⁵.

Miles de personas⁹⁶ quedaron con discapacidades a causa de la guerra y enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos, apoyo económico y asistencia social, agravadas por el aumento de los costos de atención especializada⁹⁷. Existen además marcadas desigualdades entre las personas con discapacidad del sur y aquellas del norte y este, las más afectadas por el conflicto⁹⁸. Un estudio con 6004 personas mostró que en la provincia oriental hay menor acceso a atención médica regular, rehabilitación, empleo, servicios especializados y apoyo financiero gubernamental⁹⁹.

Las mujeres con discapacidad constituyen el grupo más vulnerable en contextos de posguerra, enfrentando altos niveles de violencia de género, pobreza, estigmatización y exclusión¹⁰⁰. Organizaciones asociadas a APWLD destacan los efectos a largo plazo en mujeres, especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, Navamani¹⁰¹, de Batticaloa, quien perdió una pierna durante la guerra, enfrentó grandes dificultades para evacuar su hogar

⁹³ Permanent People's Tribunal. (2013, December). People's Tribunal on Sri Lanka. https://www.ptsrilanka.org/wp-content/uploads/2017/04/ppt_final_report_web_en.pdf.

⁹⁴ Permanent People's Tribunal. (2013, December). People's Tribunal on Sri Lanka. https://www.ptsrilanka.org/wp-content/uploads/2017/04/ppt_final_report_web_en.pdf.

⁹⁵ Permanent People's Tribunal. (2013, December). People's Tribunal on Sri Lanka. https://www.ptsrilanka.org/wp-content/uploads/2017/04/ppt_final_report_web_en.pdf.

⁹⁶ Permanent People's Tribunal. (2013, December). People's Tribunal on Sri Lanka. https://www.ptsrilanka.org/wp-content/uploads/2017/04/ppt_final_report_web_en.pdf.

⁹⁷ En una encuesta de referencia realizada por Navajeevana en las regiones del sur y este de Sri Lanka, las categorías de discapacidad más comunes son: discapacidad física, trastornos mentales, discapacidad auditiva y del habla, y discapacidad visual (Navajeevana, 2020). Referencia: Navajeevana. (2020). *Baseline survey on access to basic medical care and rehabilitation services for persons with disabilities in southern and eastern provinces in Sri Lanka*.

⁹⁸ Samararatne, D., & Soldatic, K. (2018). 'Out of the shadows': War-affected women with disabilities in Sri Lanka. https://lst.lk/wp-content/uploads/2024/02/Out-of-the-Shadows_Final-Report-English-2-2018.pdf; Navajeevana. (2020). *Baseline survey on access to basic medical care and rehabilitation services for persons with disabilities in southern and eastern provinces in Sri Lanka*.

⁹⁹ Navajeevana. (2020). *Baseline survey on access to basic medical care and rehabilitation services for persons with disabilities in southern and eastern provinces in Sri Lanka*.

¹⁰⁰ Samararatne, D., & Soldatic, K. (2018). 'Out of the shadows': War-affected women with disabilities in Sri Lanka. https://lst.lk/wp-content/uploads/2024/02/Out-of-the-Shadows_Final-Report-English-2-2018.pdf

¹⁰¹ Not her real name.

durante ciclones e inundaciones en 2024 y 2025, sin recibir apoyo gubernamental ni durante ni después de la emergencia¹⁰².

La situación se agrava con la crisis económica de Sri Lanka en 2022 y el posterior rescate del FMI, que impuso políticas neoliberales como recortes salariales en el sector público, eliminación de subsidios, aumento de impuestos, uso de pensiones y encarecimiento de la energía. Estas medidas afectan desproporcionadamente a comunidades rurales y trabajadoras¹⁰³.

Se estima que la mitad de la población del país vive en condiciones de vulnerabilidad multidimensional, siendo mujeres y niños los más afectados¹⁰⁴. Un caso es el de Nimala¹⁰⁵, quien tiene fragmentos de metralla en la cabeza que le causan convulsiones. Debido al alto costo del transporte tras la crisis, dejó de asistir a controles médicos¹⁰⁶. Además, no puede asegurar sus cultivos porque no posee la tierra que trabaja¹⁰⁷. En la práctica, las políticas del FMI no benefician a mujeres con discapacidad en contextos de conflicto, sino que trasladan la carga económica a las poblaciones más vulnerables, mientras protegen los intereses del Norte Global.

Estudio de caso 7: Myanmar

Myanmar firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el 16 de julio de 2015. Posteriormente, lo ratificó el 6 de octubre de 2017, entrando en vigor el 6 de enero de 2018.

Como contexto histórico, Myanmar ha estado gobernado por sucesivos regímenes militares desde el golpe de Estado de marzo de 1962, apenas 14 años después de su

¹⁰² Suriya Women's Development Centre. (2025). Long term vulnerabilities of women in the post war context - Sri Lanka. [Unpublished].

¹⁰³ Asia Peoples Movement on Debt and Development. (2023, August 31). IMF, hands off Sri Lanka!. <https://apmdd.org/imf-hands-off-sri-lanka/>; Silva, A.V. & Wedagedara, A. (2025, August 29). Sri Lanka's crisis shows how debt is devouring the Global South. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/opinions/2025/8/29/sri-lankas-crisis-shows-how-debt-is-devouring-the-global-south>.

¹⁰⁴ News Agencies. (2023, November 13). Sri Lanka top court finds Rajapaksa brothers guilty of economic crisis. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/15/sri-lanka-top-court-finds-rajapaksa-brothers-guilty-of-economic-crisis#:~:text=Sri%20Lanka%20Supreme%20Court%20has,crisis%20by%20mishandling%20the%20economy>

¹⁰⁵ Kadigamar, N. (2025, February 27). Sri Lanka : IMF's iron clasp, a maiden budget and protecting the poor. CADTM. <https://www.cadtm.org/IMF-s-iron-clasp-a-maiden-Budget-and-protecting-the-poor>

¹⁰⁶ Not her real name.

¹⁰⁷ Suriya Women's Development Centre. (2025). Long term vulnerabilities of women in the post war context - Sri Lanka. [Unpublished].

independencia en enero de 1948. Este dominio militar profundizó la discriminación sistémica y estructural contra minorías sociales, étnicas y religiosas, intensificando los conflictos armados. El ejército nacional, conocido como Tatmadaw, implementó desde la década de 1960 una estrategia contrainsurgente llamada “los cuatro cortes”, destinada a impedir que los grupos armados accedieran a alimentos, financiamiento, inteligencia y reclutas. Esta estrategia incluyó ataques directos contra civiles, quema de aldeas, destrucción de escuelas y servicios de salud, y restricciones a la ayuda humanitaria.

Aunque el país experimentó una “transición” hacia un gobierno nominalmente civil, el ejército mantuvo el control de funciones clave al momento de ratificar el PIDESC. En ese período, el genocidio contra el pueblo rohinyá en el estado de Rakáin estaba en pleno desarrollo, mientras el conflicto en el estado de Kachin continuaba, junto con otros enfrentamientos en distintas regiones, agravando las brechas en los derechos económicos, sociales y culturales.

Tras el intento de golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, la junta militar sumió al país en una grave crisis humanitaria y de derechos humanos, incumpliendo sus obligaciones internacionales. Entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de marzo de 2026, se registraron 65.978 enfrentamientos armados y ataques contra civiles, con 17.871 muertes en 328 municipios de los 330 del país. La junta llevó a cabo 6.991 ataques aéreos en 190 municipios¹⁰⁸. Además, al menos 3.730.700 personas fueron desplazadas internamente hasta el 20 de abril de 2026¹⁰⁹.

El acceso a la información ha sido reconocido como esencial para garantizar los derechos del PIDESC. En Myanmar, el acceso a internet es crucial para la supervivencia durante el conflicto, especialmente en zonas rurales y de minorías étnicas donde las telecomunicaciones tradicionales son limitadas. Se ha observado un patrón claro: los apagones de internet incrementan la vulnerabilidad de la población ante ataques aéreos. Entre enero y marzo de 2026, la junta realizó 423 bombardeos que causaron al menos 728 muertes civiles; de estos, el 96% ocurrieron en zonas con cortes de internet¹¹⁰.

¹⁰⁸ ACLED (10 Apr 2026) Data Accessed 10 Apr 2026

¹⁰⁹ [UNHCR Myanmar \(20 Apr 2026\) Total Internally Displaced Persons \(IDPs\)](#)

¹¹⁰ [Myanmar Internet Project \(19 Apr 2026\) Report on Communication Disruptions and Impacts in Regions Affected By Airstrikes \(Jan - Mar 2026..\)](#)

Se recomienda que las interpretaciones del PIDESC reconozcan el acceso a internet y a los sistemas de comunicación como elementos esenciales para la supervivencia y la protección de los derechos en contextos de conflicto, prohibiendo ataques o restricciones a esta infraestructura.

7.1. Autodeterminación

Tras el golpe de 2021, comunidades locales y grupos étnicos han ejercido su derecho a la autodeterminación mediante la creación de unidades federales y estructuras administrativas propias, como las de Sagaing, Magway y Mandalay, así como consejos étnicos como el Consejo Ejecutivo Interino Karenni, el Consejo de Chinland y las estructuras administrativas Kawthoolei en el estado Karen. Esto ha provocado una intensificación de la violencia por parte de la junta. Un ejemplo es el ataque aéreo del 11 de abril de 2023 en la aldea de Pazigyí (región de Sagaing), donde murieron más de 165 personas, incluidos más de 30 niños, durante la inauguración de una oficina de gobernanza local¹¹¹. Ataques posteriores alcanzaron a sobrevivientes y rescatistas.

7.2. Bloqueo de medios de subsistencia y desplazamiento forzado

La junta y milicias aliadas han desalojado forzosamente a comunidades y confiscado tierras bajo el pretexto de ser “tierras vacantes”. En el municipio de Hopong (estado Shan), estas prácticas han desplazado a comunidades indígenas y agrícolas de sus territorios ancestrales¹¹². También se han confiscado propiedades de miembros de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) y de civiles vinculados a la resistencia. Asimismo, la colocación deliberada de minas terrestres (prohibidas internacionalmente) en zonas civiles y campos de cultivo ha impedido el acceso a medios de subsistencia en estados como Kachin, Karen y Karenni¹¹³.

7.3. Campaña de los “cuatro cortes”

En un contexto donde existen evidencias de genocidio contra el pueblo rohinyá¹¹⁴, el

¹¹¹ [Myanmar Now \(17Apr 2023\) ‘Can nobody save us?’ – Eyewitnesses recount Myanmar military airstrike on Kanbalu](#); [RFA \(17 Apr 2023\) Death toll from Myanmar junta air attack on northern village rises to 200](#); [Irrawaddy \(21 Apr 2023\) Myanmar Junta Bombs Pazi Gyi Nine Days After Massacre](#); [RFA \(20 Apr 2023\) Junta bombs Myanmar village again where earlier strike killed 200](#)

¹¹² [The Transnational Institute \(14 Mar 2024\) Crisis in the Pa-O Region: A renewed conflict-zone in Myanmar](#); [SHAN \(4 Apr 2026\) 12 Arrested in Hopong Township After Protesting Land Seizures](#)

¹¹³ [Amnesty International \(20 July 2022\) Myanmar: Military’s use of banned landmines in Kayah State amounts to war crimes](#); [Karen Human Rights Group \(4 Apr 2023\) 2023 International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action](#)

¹¹⁴ [Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide \(The Gambia v. Myanmar: 11 States intervening\)](#)

deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales desde 2021 ha afectado de manera desproporcionada a mujeres, niñas, personas LGBTIQ+ y minorías étnicas. Las fuerzas de la junta han cometido graves violaciones, incluyendo asesinatos, tortura, violencia sexual, trabajo forzado y saqueo, especialmente en estados como Rakáin, Kachin y Shan. Estas prácticas forman parte de una estrategia sistemática documentada por expertos de la ONU, incluyendo el Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en Myanmar y la Misión Internacional Independiente de Investigación¹¹⁵.

7.4. Impacto en las mujeres

Las mujeres enfrentan pérdida de empleo, desplazamiento, inseguridad alimentaria y el colapso del sistema de salud, especialmente porque suelen ser las principales cuidadoras en entornos precarios y violentos. Al mismo tiempo, la junta ataca deliberadamente a organizaciones que brindan apoyo a mujeres, niñas y personas LGBTIQ+, aumentando su vulnerabilidad a la violencia, la trata y la explotación¹¹⁶.

7.5. Discriminación violenta contra personas LGBTIQ+

La junta también ha promovido el uso de discursos de odio para limitar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas LGBTIQ+, quienes enfrentan violencia tanto legal como extralegal. La legislación birmana penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta 10 años de prisión bajo la Sección 377 del Código Penal de 1860 ("relaciones carnales contra el orden de la naturaleza").

Tras el golpe de 2021 y en el contexto de conflicto armado, el control militar de las fuerzas de seguridad ha incrementado el acoso, la detención arbitraria y los abusos contra personas LGBTIQ+, afectando gravemente su acceso a salud, alimentación, ayuda humanitaria, empleo y educación. Desde el golpe y hasta junio de 2024, al menos 12 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas por participar en protestas o apoyar el movimiento de desobediencia civil. Decenas más han sido detenidas y sometidas a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia extrema y humillante¹¹⁷.

¹¹⁵ [A/HRC/39/64 \(EN\) \(12 Sep 2018\) Report of the independent international fact-finding mission on Myanmar](#)

¹¹⁶ [A/79/5500 \(EN\) \(25 Oct. 2024\) Situation of human rights in Myanmar Note by the Secretary-General](#)

¹¹⁷ [OHCHR \(Jun 2024\) Killing of LGBTIQ+ persons in military-controlled Myanmar](#)

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU considera que los artículos 6, 7 y 8 del Pacto son interdependientes, y estos derechos son vulnerados sistemáticamente en Myanmar¹¹⁸.

La Confederación Sindical Internacional (ITUC) clasifica a Myanmar como uno de los 10 peores países del mundo para las y los trabajadores. Miembros de la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM), afiliada a la ITUC, han sido objeto de represión, incluyendo encarcelamiento, tortura y abusos sexuales durante interrogatorios. Toda la dirigencia de la CTUM enfrenta órdenes de arresto; a quienes son capturados se les confiscan los pasaportes, y a quienes están en el exilio se les revoca la ciudadanía. Actualmente, 151 miembros están encarcelados, dos de ellos con condenas de cadena perpetua. También se ha reportado al menos una muerte bajo custodia y la ejecución de un sindicalista¹¹⁹.

7.6. Masacre de Hlaing Tharyar

Las fuerzas de seguridad de la junta han atacado y asesinado a trabajadores que participaban en protestas prodemocráticas y exigían derechos básicos, como salarios impagos. El 14 de marzo de 2021, en el municipio de Hlaing Tharyar (región de Yangon), al menos 65 manifestantes y transeúntes fueron asesinados. Esta zona industrial, donde viven muchos trabajadores y sindicalistas, fue escenario de una operación en la que unos 200 militares armados rodearon a los manifestantes y abrieron fuego deliberadamente para matar o herir, sin que existiera amenaza contra ellos. Al día siguiente, la junta culpó a los “alborotadores” e impuso la ley marcial en la zona¹²⁰.

7.7. Disparos contra trabajadores que exigían salarios atrasados

El 15 de marzo de 2021, trabajadores se reunieron frente a la fábrica de calzado Xing Jia, de propiedad china, en Hlaing Tharyar, para reclamar 15 días de salario y pago de horas extras. La fábrica había cerrado temporalmente debido a la crisis tras el golpe. Según un informe de la organización Action Labor Rights (ALR), poco después de reunirse, un camión militar llegó y abrió fuego sin previo aviso. La primera persona asesinada fue la mujer que lideraba la protesta¹²¹. Cuatro hombres más fueron baleados, tres de ellos

¹¹⁸ [ITUC \(16 May 2025\) Global Rights Index 2025](#)

¹¹⁹ [ITUC \(13 Feb 2026\) For democracy in Myanmar](#)

¹²⁰ [HRW \(2 Dec 2021\) Myanmar: Protesters Targeted in March Massacre](#)

¹²¹ [Myanmar Now \(17 Mar 2021\) At least six killed after factory owner calls in military in Hlaing Tharyar](#)

murieron, y 17 personas fueron arrestadas. Seis de los detenidos fueron condenados a tres años de prisión por tribunales militares¹²².

7.8. Historial de ataques contra trabajadores

Myanmar tiene un largo historial de ataques contra trabajadores y líderes sindicales, incluso antes del golpe de 2021. Sin embargo, estos se intensificaron con la represión política y los conflictos armados. El 5 de junio de 2025, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) activó por tercera vez en su historia el artículo 33 de su constitución en relación con Myanmar¹²³. Entre las medidas recomendadas se incluyen revisar inversiones, cadenas de suministro y cooperación que puedan beneficiar indirectamente al régimen, así como restringir el suministro de armas, combustible para aviones y flujos financieros hacia la junta. La resolución de la OIT expresó profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos fundamentales, como la libertad de asociación, la prohibición del trabajo forzoso y las libertades civiles básicas en Myanmar¹²⁴.

7.9. Derecho a la alimentación

El conflicto armado es uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho a la alimentación. La inanición de civiles está expresamente prohibida en contextos de guerra, y esta prohibición se viola cuando la escasez o la negación del acceso a alimentos provoca muertes o cuando una población es sometida al hambre mediante la privación de fuentes o suministros alimentarios¹²⁵.

En Myanmar, hasta octubre de 2024, 18,6 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria, y 13,3 millones enfrentaban niveles de inseguridad alimentaria de emergencia. Cientos de miles de personas en el estado de Rakáin están completamente aisladas de la ayuda humanitaria, expuestas al hambre, enfermedades y condiciones extremas. El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, advirtió que la inacción provocará un número “incalculable” de muertes¹²⁶.

¹²² [OpenDemocracy \(17 Jun 2021\) Report says soldiers shot three dead at Myanmar factory making US cowboy boots](#)

¹²³ [ITUC \(5 Jun 2025\) Myanmar: Historic decision to hold junta accountable a 'victory for justice, workers' rights and international solidarity'](#)

¹²⁴ [ILO \(5 Jun 2025\) Resolution concerning the measures recommended by the Governing Body under article 33 of the ILO Constitution on the subject of Myanmar](#)

¹²⁵ [CRC \(Dec 2001\) The right to food in situations of armed conflict: The legal framework](#)

¹²⁶ [A/79/550 \(EN\) \(25 Oct 2024\) Situation of human rights in Myanmar Note by the Secretary-General](#)

Una tendencia alarmante ha sido el ataque aéreo contra camiones que transportaban alimentos y suministros humanitarios. En diciembre de 2025, en la región de Sagaing, la junta bloqueó la carretera Shwebo-Myitkyina y luego bombardeó cientos de vehículos atrapados, además de atacar con morteros y ametralladoras, causando la muerte de un civil e hiriendo a seis más¹²⁷. En marzo de 2026, en la región de Magway, la junta bombardeó un área de descanso donde había camiones estacionados, matando al menos a 25 personas e hiriendo a muchas otras¹²⁸.

7.10. Ayuda y desastres naturales

Myanmar es un caso donde el conflicto armado se entrelaza con desastres naturales, como ocurrió tras el terremoto de marzo de 2025. La junta militar instrumentalizó la ayuda humanitaria bloqueando el acceso a las zonas más afectadas, imponiendo toques de queda, controles estrictos y retrasos prolongados, e incluso atacando convoyes de ayuda. Las agencias humanitarias reportaron escasez de alimentos, agua y combustible, con camiones retenidos en puestos de control militar. La ONU señaló que la junta privó deliberadamente a la población de ayuda como forma de castigo, un patrón recurrente¹²⁹.

7.11. Similitudes con el conflicto de Sri Lanka

Este patrón no es nuevo. En Sri Lanka, que comparte características con Myanmar como el nacionalismo budista y conflictos étnicos, el gobierno bloqueó la ayuda a cientos de miles de tamiles en el norte, quienes fueron confinados en campos entre mayo de 2009 y septiembre de 2012. Estas poblaciones enfrentaron escasez de alimentos y brotes epidémicos debido a malas condiciones sanitarias. El gobierno rechazó incluso solicitudes directas del Secretario General de la ONU para facilitar la ayuda, alegando razones de "seguridad nacional" y la búsqueda de combatientes del LTTE entre civiles¹³⁰.

7.12. Persecución del personal sanitario

El personal de salud que participa en el Movimiento de Desobediencia Civil ha sido objeto de arrestos arbitrarios, amenazas y asesinatos selectivos por parte del régimen, lo que ha afectado gravemente la prestación de servicios médicos. Entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de enero de 2026, se documentaron al menos 1.873 incidentes de violencia u

¹²⁷ [Myanmar Now \(20 Dec 2025\) Civilians fleeing Myanmar junta offensive killed by airstrikes in Sagaing](#)

¹²⁸ [Myanmar Now \(2 Mar 2026\) Junta airstrike kills at least 25 at truck stop in Magway](#)

¹²⁹ [BBC \(3 Apr 2025\) How aid becomes a weapon in Myanmar's war zone](#)

¹³⁰ [Tamil Guardian \(2 Jun 2009\)... as Sri Lanka rejects aid access](#)

obstrucción contra la atención sanitaria. Las instalaciones de salud fueron dañadas o destruidas en 472 ocasiones y utilizadas con fines militares en 228 ocasiones. Al menos 170 trabajadores sanitarios fueron asesinados y 909 arrestados¹³¹.

7.12. Bombardeo del Hospital General de Mrauk-U

El 10 de diciembre de 2025, en el municipio de Mrauk-U (estado de Rakáin), la junta lanzó dos bombas de 500 libras sobre el Hospital General de Mrauk-U en el Día Internacional de los Derechos Humanos, matando al menos a 33 civiles e hiriendo a aproximadamente 76 personas. Este ataque fue descrito como el más mortífero contra una instalación sanitaria desde el intento de golpe¹³².

7.13. Ataques a hospitales clandestinos

El 18 de febrero de 2026, en el municipio de Natogyi (región de Mandalay), la junta destruyó un hospital subterráneo de 100 camas mediante explosivos colocados dentro de la instalación. Este hospital había sido construido bajo tierra para evitar ataques aéreos y operaba desde finales de 2024 con apoyo del Gobierno de Unidad Nacional¹³³.

7.14. Terror contra docentes y estudiantes

La Asociación de Asistencia a Presos Políticos informó que los ataques de la junta causaron la muerte de 112 docentes y estudiantes en 2025, incluidos 80 fallecidos por ataques aéreos. De las 96 víctimas completamente verificadas, 71 eran menores de 18 años. La región de Sagaing registró el mayor número de muertes con 39, seguida por el estado de Rakáin con 27¹³⁴.

7.15. Ataque a la escuela de Let Yet Kone

El 16 de septiembre de 2022, en el municipio de Tabayin (región de Sagaing), helicópteros de la junta dispararon contra una escuela ubicada dentro de un monasterio budista en la aldea de Let Yet Kone, causando la muerte de 14 personas, incluidos 12 niños. Posteriormente, tropas de la junta irrumpieron en la escuela y arrestaron a 20 estudiantes y docentes¹³⁵.

¹³¹ [ReliefWeb \(12 Mar 2026\) Attacks on Health Care in Myanmar: 18 February - 03 March 2026](#)

¹³² [The Irrawaddy \(11 Dec.\) Hospital Massacre in Mrauk-U: Junta Airstrike Kills 33, Injures 76](#)

¹³³ [Mizzima \(21 Feb 2026\) နားထိုးကြီးရဲ့ မြေအောက်ဆေးရုံကို စစ်တပ်မရှင် မိုင်းခဲဖျက်ဆီး](#)

¹³⁴ [DVB \(22 Jan 2026\) စစ်တပ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တနင်္သာရေတိုင်း ဆရာ၊ ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား ၁၁၂ ဦး သေဆုံး](#)

¹³⁵ [RFI \(22 Sep 2022\) Teachers recount carnage of Myanmar school helicopter attack ; Reuters \(20 Sep 2022\) Myanmar army helicopters fire on school, killing 13, media and residents say](#)

7.16. Decapitación de un profesor del CDM

En octubre de 2022, tropas militares en el municipio de Pauk (región de Magway) secuestraron a Saw Moe Tun, un profesor de matemáticas de 46 años que participaba en el Movimiento de Desobediencia Civil. Los soldados lo decapitaron, le cortaron tres dedos (símbolo de la resistencia pro-democrática) y colgaron su cabeza en la entrada de la escuela del pueblo Taung Myint. Posteriormente, incendiaron la escuela para aterrorizar a la comunidad y disuadir iniciativas educativas alternativas¹³⁶.

7.17. Asesinato de estudiantes durante exámenes

El 12 de mayo de 2025, en el municipio de Tabayin (región de Sagaing), la junta bombardeó una escuela secundaria en la aldea de Oe Htein Twin, matando a 22 niños y dos docentes. El ataque dejó 105 heridos, de los cuales 40 perdieron extremidades. Aproximadamente 200 estudiantes estaban presentando exámenes en el momento del bombardeo. Un avión de combate sobrevoló la escuela antes de regresar para lanzar dos bombas directamente sobre los edificios¹³⁷.

7.18. Destrucción religiosa y cultural

Myanmar Witness documentó 312 ataques aéreos contra edificios religiosos entre enero de 2024 y diciembre de 2025, incluyendo monasterios, iglesias, mezquitas y templos, con un promedio de 13 ataques mensuales. Los monasterios budistas representaron la mayoría de los daños (261 edificios, 84%), seguidos por iglesias (44 edificios, 13%). El 65% de los incidentes resultaron en daños graves o destrucción total de los sitios culturales y religiosos¹³⁸.

7.19. Masacre en el concierto de A Nang Pa

El 23 de octubre de 2022, en el municipio de Hpakant (estado de Kachin), aviones de combate de la junta bombardearon un concierto musical que celebraba el aniversario de la Organización para la Independencia de Kachin en la aldea de A Nang Pa, matando al menos a 62 personas, incluidos músicos y figuras culturales destacadas¹³⁹.

¹³⁶ [Myanmar Witness \(19 Oct 2022\) School teacher killed and body mutilated](#) ; [Myanmar Now \(21 Oct 2022\) Regime forces attacked with drones after decapitating teacher](#); [Irrawaddy \(18 Apr 2022\) Myanmar Junta Troops Behead NUG Teacher](#)

¹³⁷ [Irrawaddy \(13 May 2025\) A Familiar Lie: Myanmar Junta Denies Deadly School Bombing](#)

¹³⁸ [Myanmar Witness \(2 Apr 2026\) Myanmar's protected religious sites devastated by airstrikes](#)

¹³⁹ [Myanmar Now \(28 Oct 2022\) A Nang Pa airstrike fatalities expected to rise as Myanmar military blocks victims' access to medical care](#); [Reuters \(24 Oct 2022\) Air strike during Myanmar concert kills at least 50 - media, opposition](#)

7.20. Bombas incendiarias contra civiles en una casa de té

El 5 de diciembre de 2025, en el municipio de Tabayin, una aeronave de la junta lanzó dos bombas sobre una concurrida casa de té en la aldea de Marakan, matando a 18 civiles e hiriendo a 22 más. Las víctimas estaban reunidas para ver un partido de fútbol entre Myanmar y Filipinas durante los Juegos del Sudeste Asiático (SEA Games). Se concluyó que se utilizaron bombas incendiarias debido a la destrucción total de 19 viviendas cercanas¹⁴⁰.

7.21. Bombardeo durante un partido de fútbol

El 15 de enero de 2026, en el municipio de Natogyi (región de Mandalay), dos aviones de combate de la junta lanzaron bombas de 500 libras sobre un partido "Fútbol por la Amistad" entre miembros de la resistencia local y residentes en la aldea de Zee Phyu Kone. El ataque causó la muerte de cuatro personas y dejó entre 25 y 30 heridos. No había combates en curso en el momento del ataque¹⁴¹.

7.22. Ataque durante un festival pagoda

El 23 de febrero de 2026, en el municipio de Ngazun (región de Mandalay), tres paramotores de la junta bombardearon un festival religioso en una pagoda en la aldea de Talin Kone, causando la muerte de tres civiles. Ataques recientes en la zona han obligado a miles de personas a huir de las aldeas a lo largo del río Irrawaddy¹⁴².

¹⁴⁰ [Myanmar Now \(8 Dec 2025\) ဒီပဲယင်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ၁၈ ဦး သေဆုံးကြောင်း NUG အတည်ပြု](#)

¹⁴¹ [DVB \(17 Jan 2026\) နွားထိုးကြီးက ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲကို စစ်တပ်ဗုံးကြဲ ငှ ဦးသေပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရ](#)

¹⁴² [Myanmar Now \(25 Feb 2026\) Woman, two girls killed in Myanmar junta attack on Buddhist festival](#)